

## REPÚBLICA DE COLOMBIA



### RAMA JUDICIAL

### TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

**Medellín, veinte (20) de abril de dos mil veintitrés (2023)**

La Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, integrada por los Magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES (ponente), VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE, cumplido el traslado de que trata el artículo 13 del Decreto 2213 de 2022, se procede a dictar la sentencia que corresponde en este proceso ordinario de doble instancia instaurado por MARIA GLADYS MUÑOZ SALAZAR contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES- (Radicado 05001-31-05-010-2019-00245-01).

### ANTECEDENTES

Pretende la demandante el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes causada por el fallecimiento de su cónyuge JAVIER DE JESÚS LONDOÑO VELÁSQUEZ a partir del 17 de mayo de 2017, junto con el pago del retroactivo pensional, las mesadas adicionales, los intereses moratorios, la indexación y las costas del proceso.

Tales aspiraciones las fundamentó aduciendo que el señor Londoño Velásquez falleció el 17 de mayo de 2017, estando afiliado en toda su vida en calidad de cotizante al Seguro Social. Estuvieron casados desde el 19 de diciembre de 1998, compartiendo techo, lecho y mesa hasta el día de su muerte, para cuando tenía alcanzadas 355 semanas, cotizadas entre el 01 de enero de 1967 y el 16 de julio de 1985. En 1997 el fallecido había solicitado el reconocimiento de la pensión de vejez, siendo negada por medio de la

Resolución N° 002912 de ese año, pero en su lugar, le fue reconocida una indemnización sustitutiva por valor de \$1.220.000. Solicitó la pensión de sobrevivientes, también negada por acto administrativo SUB152096 del 10 de agosto de 2017 por no acreditar el número de semanas requeridas.

COLPENSIONES se pronunció en oportunidad con aceptación de los hechos relativos al fallecimiento del afiliado, el reconocimiento de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez y la negativa de la prestación por sobrevivencia, señalando la ausencia en la satisfacción de los requisitos que por ley se exigen para acceder a la prestación pedida. Como excepciones de fondo formuló las que tituló inexistencia de la obligación de reconocer y pagar a la demandante la prestación solicitada, buena fe, improcedencia de los intereses de mora, improcedencia de la indexación de las condenas, imposibilidad de condena en costas, prescripción y compensación.

Surtido el trámite de rigor, el 21 de abril de 2022 el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín profirió sentencia, en la que ABSOLVIÓ a Colpensiones de las pretensiones promovidas en su contra, imponiendo las costas procesales a la demandante, agencias en derecho que fueron fijadas en la suma de \$100.000.

El fallador atendió como argumentos de la absolución: 1) el reconocimiento de la indemnización sustitutiva de vejez, de donde extrajo que el afiliado no generó el derecho pensional bajo la normatividad que era aplicable y que la administradora demandada presumió la no procedencia de la pensión de vejez estando cubierto el seguro por vejez con lo efectivamente recibido, sin que jamás ingresara a su patrimonio la expectativa de transmisión, habiéndose recibido la prestación previo a la data en que se consolidaron las nupcias con la demandante, y 2) la insatisfacción del test de procedencia dispuesto por la Corporación Constitucional en tanto no encontró demostrada la afectación al mínimo vital de la solicitante y en igual sentido, la dependencia económica que es exigida.

La activa se apartó de esa determinación acudiendo al recurso vertical por considerar que en el asunto si es viable la aplicación de la condición más

beneficiosa por cumplirse con cada uno de los presupuestos jurisprudenciales que trae consigo el test de procedencia, estando además satisfechos los requisitos que pregonaba el Decreto 758 de 1990 sosteniendo el desamparo del núcleo familiar del fallecido y la indiscutida convivencia dada hasta la fecha de la muerte (Min 1:05:14 Audio Archivo 13).

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

### CONSIDERACIONES

No es tema de discusión al interior del plenario que María Gladys Muñoz Salazar contrajo matrimonio con Javier de Jesús Londoño Velásquez el 19 de diciembre de 1998 (Pág. 12 Archivo 001), quien como afiliado al RPMPD y al alcanzar un total de 355 semanas de cotización, le fue reconocida una indemnización sustitutiva de vejez en cuantía de \$1.220.729 por medio del acto administrativo N° 002912 de 1997 (Págs. 15-16 Archivo 001). Tampoco es discutido que a la demandante le fue negada en sede administrativa la pensión de sobrevivientes por no estar acreditadas las semanas exigidas por la normativa aplicable dada la fecha del óbito además de haber sido reconocida una indemnización sustitutiva de vejez, sin ser posible que iguales aportes sirvan de sustento para la nueva prestación económica.

En esa línea, debe circunscribirse el análisis en esta oportunidad a dilucidar la procedencia de la prestación en favor de María Gladys Muñoz Salazar en calidad de cónyuge de cara a la indemnización sustitutiva de vejez reconocida en vida de Javier de Jesús Londoño Velásquez y al principio constitucional de la condición más beneficiosa

Pues bien, respecto de la imposibilidad de ser causada la prestación que se procura, por haber sido reconocida y efectivamente pagada al afiliado Javier de Jesús Londoño Velásquez una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez basta decir, que la jurisprudencia en nuestra especialidad ha sido pacífica y constante al establecer que *“la indemnización sustitutiva de la*

*pensión de vejez recibida en vida por el causante no implica, ipso jure, la renuncia por parte del asegurado o sus derechohabientes a reclamar una pensión por un riesgo distinto al de vejez, por constituir ésta una contingencia amparable diferente, pues la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez en el presente caso sólo consolidó lo referente a ese riesgo”* (Ver SL9769-2014, SL1624-2018, SL 4053-2022, SL 1021-2022 y SL469-2023), por lo que para la Corte ninguna razón válida existe para negar el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a los beneficiarios del causante, pretextando el hecho de que a éste, le fue reconocida en vida la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, siempre y cuando se logre demostrar que se tiene derecho a la pensión que debe ser concedida, precisando que lo previsto en el literal d) del artículo 2º del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año excluye del Seguro social obligatorio de invalidez, vejez y muerte a las personas que hubieren recibido la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez o de invalidez por riesgo común, pero ello no va dirigido al grupo con posibilidades de beneficiarse con una pensión por riesgo distinto al que corresponde a la indemnización sustitutiva (Ver SL1624-2018).

De tal modo, la solución impartida en este tópico por el operador inicial, riñe con la lógica que impone el escenario fáctico presente, de cara a la aplicación e interpretación de las normas y el riesgo a cubrir, permitiendo ello concluir que aun con la prestación que en vida y por el riesgo de vejez percibió el señor Londoño Velásquez, no existe un dispositivo normativo que excluya a sus beneficiarios del sistema para acceder a la pensión de sobrevivientes.

Ahora bien, es claro en el asunto como se dijo, que el afiliado no cotizó las mínimas 50 semanas dentro de los 3 años anteriores al deceso, tal cual lo exige el artículo 12 de la Ley 797 de 2003 - norma aplicable dada la fecha del óbito-, pues en toda su vida laboral cuenta con 355 semanas, de las cuales 0,00 fueron cotizadas dentro de los 3 años anteriores a la muerte, en tanto las alcanzó en el período del 01 de enero de 1967 hasta julio de 1985, ante lo cual, el mandato tuitivo autoriza desatender la norma vigente -haciendo una excepción también al artículo 16 del CST, el cual establece que las normas sobre trabajo, por ser de orden público producen efecto general inmediato-para en su lugar, dar aplicación al precepto extinguido.

De modo que, esta Sala de Decisión Laboral debe verificar si el principio constitucional que se pretende sea aplicado para acceder a la prestación por cubrimiento del riesgo de muerte, resulta procedente en el asunto, ya que al no ser absoluto, no cubija todos los casos, debiendo para tal efecto acudir a las reglas fijadas en la jurisprudencia.

En casos como el presente, en que el fallecimiento ocurrió en vigencia del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria laboral unificó su criterio en sentencia de enero 25 de 2017, radicación 45.262, disponiendo la procedencia de la condición más beneficiosa únicamente en aplicación de la normatividad inmediatamente precedente y en la sucesión o tránsito legislativo de la regulación jurídica modificadora.

Así las cosas, como es aceptado por la activa que la acreditación de los requisitos estaría sujeta a lo preceptuado por el Decreto 758 de 1990, es a partir de tal premisa que se promoverá el análisis, ya que no se logran satisfacer las semanas requeridas para aplicar el texto original de la Ley 100 de 1993, ni se cumple el requisito de temporalidad de tres años que estableció el alto tribunal, con el que se ha restringido la aplicación de esta prerrogativa excepcional.

De tal modo, la Sala acude a la SU 005 de 2018 en la que se ajustó la jurisprudencia en cuanto al alcance del principio de la condición más beneficiosa en materia de pensión de sobrevivientes, donde se determinaron las circunstancias que dan lugar a que se aplique, de manera ultractiva, las disposiciones del Acuerdo 049 de 1990 -o de un régimen anterior- en cuanto al requisito de las semanas de cotización, frente a un afiliado que fallece en vigencia de la Ley 797 de 2003, al evidenciarse que el causante logró acreditar 355 semanas en la vigencia del Decreto 758 de 1990; sin embargo, lo que es observado es que en el escenario de las previsiones del ya aludido decreto tampoco procede el derecho, en tanto la causación de esta prestación solo es posible si se acredita por parte de la activa que es una persona vulnerable, para lo cual es imperativo superar el test de procedencia que implica la acreditación de las siguientes cuatro condiciones necesarias y en conjunto

suficientes, para hacerse beneficiaria de la prestación, sin que así haya ocurrido.

Lo anterior es así en tanto la segunda<sup>1</sup>, tercera<sup>2</sup> y cuarta<sup>3</sup> condición no se hallan debidamente demostradas en este escenario jurídico, puesto que sobre las dos primeras, que guardan relación con el aspecto económico de la peticionaria, lo evidenciado partiendo de las condiciones propias del caso y el dicho de la misma demandante, es que desde hace aproximadamente 10 o 15 años cuenta con la calidad de pensionada en cuantía de un salario mínimo legal mensual vigente, estando a su cargo de manera plena la manutención de su grupo familiar conformado por su madre, dos hermanos discapacitados y su esposo desde el año 2014, último que dejó de ejercer su actividad productiva como artesano definitivamente en esa anualidad por razones de enfermedad, lo que quiere decir que aun cuando la recurrente afirma que este ingreso resulta insuficiente para cubrir las necesidades básicas de su hogar, lo que basa a partir de las obligaciones a su cargo y lo cuantitativo de los gastos de cara a lo devengado, no es posible realizar una medición del mínimo vital arraigado de manera exclusiva al valor mismo del salario mínimo, ya que la idea de un mínimo en condiciones decorosas de vida (v.gr. vestido, alimentación, educación, salud, recreación), no va ligada sólo con una valoración numérica de lo percibido y de las necesidades biológicas a satisfacer, sino a las circunstancias propias de cada individuo, con respeto por sus particulares condiciones de vida según la posición socioeconómica alcanzada y la base de los gastos de manutención que se han venido concretando, sin que en este caso desde lo probado y a partir del entorno que ha acompañado a la demandante pueda sugerirse que el salario mínimo percibido desde por lo menos 2012 o antes junto con las ganancias que pudiera generarle el oficio de la costura y las ventas por catálogo, le impida subsistir dignamente como venía haciéndolo incluso en vida del fallecido, no

---

<sup>1</sup> Que exista afectación directa de la satisfacción de necesidades básicas, esto es, su mínimo vital y, en consecuencia, una vida en condiciones dignas por la carencia del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.

<sup>2</sup> Debe establecerse que el accionante dependía económicamente del causante antes del fallecimiento de este, de tal manera que la pensión de sobreviviente sustituye el ingreso que aportaba el causante al beneficiario.

<sup>3</sup> Debe establecerse que el causante se encontraba en circunstancias en las cuales no le fue posible cotizar las semanas previstas en el Sistema General de Pensiones para adquirir la pensión de sobrevivientes.

siendo posible aseverar que dada la cuantía de la prestación, ha vivido en situación de indignidad y mucho menos que ella haya sobrevenido en razón a la muerte de su cónyuge quien en últimas y desde años atrás su aporte económico era nulo estando a cargo de su esposa su servicio de salud al ser quien figuraba como cotizante, quien por demás percibía incrementos pensionales de cuenta del señor Londoño como persona a cargo, todo lo que difiere de la aspiración a contar con un mejor nivel de vida, y con posibilidades de planear una mejor distribución de los ingresos, pudiendo colegirse como bien se extrae de la providencia atacada, que además de no descubrirse en ese orden una afectación sobre las necesidades básicas, se vislumbra una sujeción económica del afiliado fallecido frente a la demandante y no al contrario.

Ya sobre la cuarta regla, se tiene que el afiliado tuvo por último período de cotización julio de 1985, sin que se cuente con probanza sólida de la imposibilidad de realizar cotizaciones al Sistema con posterioridad, porque en voces de la demandante el estado de salud que le impidió a su cónyuge permanecer en el ámbito de trabajo se mostró en el año 2014, informando que en precedencia, no tuvo medios económicos para asumir el aporte, lo que ningún sustento posee, tornándose en inviable dar cabida a esa afirmación, a más que bajo idénticas condiciones de trabajo y monetarias la demandante si logró su prestación por vejez.

Así las cosas, encontrando que las condiciones propuestas no se encuadran dentro de los postulados jurisprudenciales para definir a la demandante como persona en estado de vulnerabilidad, no es posible acceder a lo pedido, por lo que sin lugar a mayores elucubraciones, no hay otro camino más que confirmar la decisión de primera instancia que absolvió a la demandada de las pretensiones incoadas en su contra.




Conforme a lo preceptuado en el artículo 365-3 del CGP las costas en esta instancia son a cargo de la parte demandante, fijándose las agencias en derecho en la suma de \$100.000.

### DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Quinta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **CONFIRMA** la sentencia venida en apelación de fecha y procedencia conocidas. Las costas como quedó dicho en la parte motiva.

Notifíquese la presente decisión por EDICTO (num.3°, lit. d., art. 41 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social en concordancia con el auto 550-2021 CSJ).

Los Magistrados,

  
CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES  
  
VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO  
  
SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE



**REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
SALA LABORAL**



**SECRETARÍA  
EDICTO**

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

**HACE SABER:**

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

**Radicación:** 05001310501020190024501  
**Proceso:** ORDINARIO LABORAL  
**Demandante:** MARIA GLADYS MUÑOZ SALAZAR  
**Demandado:** COLPENSIONES  
**M. P.** CARLOS ALBERTO LEBRUN MORALES  
**Fecha de fallo:** 20/04/2023  
**Decisión:** CONFIRMA

El presente edicto se fija por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibídem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 21/04/2023 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

**RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS**

Secretario